



Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Distr. general
25 de noviembre de 2013
Español
Original: inglés

Comité contra la Tortura

49º período de sesiones

Acta resumida de la 1103ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el viernes 2 de noviembre de 2012, a las 15.00 horas

Presidente: Sr. Grossman

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención

Informes periódicos sexto y séptimo combinados de Noruega

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, *dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento*, a la Dependencia de Edición, oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un documento único que se publicará poco después del período de sesiones.

Se declara abierta la sesión a las 15.00 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención (continuación)

Informes periódicos sexto y séptimo combinados de Noruega (CAT/C/NOR/Q/7)

1. *Por invitación del Presidente, la delegación de Noruega vuelve a tomar asiento a la Mesa del Comité.*
2. **La Sra. Meinich** (Noruega) dice que no en todos los casos está clara la pertinencia para la Convención de las preguntas que se formularon el día anterior. Su Gobierno considera importantes las recomendaciones de los órganos creados en virtud de tratados y por consiguiente espera que el diálogo con el Comité esté claramente vinculado a la Convención, dado que el objetivo es mejorar el cumplimiento. Su delegación responderá a las preguntas por grupos, comenzando por el lugar que ocupa la Convención en la legislación interna y otras cuestiones de ámbito internacional.
3. Resulta difícil decir por qué ha llevado tanto tiempo ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Con todo, el proceso de ratificación se encuentra en sus últimas etapas y está previsto que el instrumento de ratificación se presente al Parlamento a principios de 2013.
4. Aunque la Convención no se ha incorporado a la legislación interna ni hay planes para hacerlo, sus disposiciones son directamente aplicables en numerosos casos. La definición de tortura en el Código Penal noruego difiere de la contenida en la Convención, pero el enfoque de Noruega está en consonancia con la Convención. Las disposiciones del Código son específicas y completas pero también abarcan los actos de tortura cometidos por razones sin especificar. El Gobierno estudiará la posibilidad de enumerar otros tipos de tortura durante la revisión del Código Penal, que de acuerdo con las previsiones concluirá en 2013.
5. Las palabras "discriminación injusta" que se utilizan en la enmienda constitucional se traducirían mejor como "trato diferencial injusto". Se trata de prohibir la discriminación negativa al tiempo que se permite la discriminación positiva. Se han propuesto otras expresiones y el Comité será debidamente informado de la que finalmente se elija.
6. El Gobierno de Noruega reconoce la importancia de la labor de su institución nacional de derechos humanos y le concede gran prioridad. Se ha establecido un grupo de trabajo interministerial para velar por el pleno cumplimiento de los Principios de París; se le ha encomendado que examine y proponga enmiendas a la legislación pertinente y está plenamente dedicado a su trabajo.
7. El Gobierno decidió no ratificar la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares pues su redacción no está clara y resulta difícil evaluar la repercusión que tendría para las obligaciones contraídas por Noruega en virtud de otros tratados. Con todo, Noruega ha ratificado todos los instrumentos fundamentales de derechos humanos y los convenios básicos de la Organización Internacional del Trabajo y asigna gran prioridad a los esfuerzos encaminados a mejorar las normas de trabajo, que son cruciales para los derechos de los migrantes.
8. En virtud del acuerdo entre Noruega y el Afganistán respecto del trato y la extradición de presos a las autoridades afganas, Noruega coopera con el Afganistán para asegurar que las personas afectadas en esos casos sean tratadas con humanidad y con arreglo al derecho internacional. Desde que se firmó el acuerdo en 2006, se ha transferido a 30 personas. En general, Noruega no ha encontrado pruebas de que se hayan producido

torturas o tratos degradantes; en el contexto de la denuncia concreta que se ha formulado, no se encontraron pruebas de tortura y la persona afectada fue puesta en libertad.

9. **La Sra. Myhren** (Noruega) dice que la ley noruega ofrece protección absoluta contra la devolución para los refugiados reconocidos y para los que están expuestos a un riesgo real de pena de muerte o a torturas en caso de regresar a su país de origen.

10. No está previsto ampliar el derecho a asistencia jurídica gratuita en los casos de expulsión. Los solicitantes de asilo que son menores no acompañados tienen derecho a asistencia jurídica gratuita en primera instancia; los adultos tienen derecho a asistencia jurídica gratuita cuando recurren una decisión desfavorable. El Gobierno reconoce la importancia de la asistencia jurídica al principio del proceso, pero la información es el medio de defensa más importante en esa fase. Por ello, la Organización Noruega para los Solicitantes de Asilo ofrece un programa de información y asesoramiento para los solicitantes de asilo en esa etapa, y la policía ofrece orientaciones sobre el derecho a disponer de asistencia jurídica y a ponerse en contacto con un representante del país de origen, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o una asociación de refugiados noruega en los casos de protección y expulsión; la policía también está obligada a prestar asistencia para comunicar con una organización independiente o un asesor letrado si así se le solicita. La información sobre la asistencia jurídica gratuita y el derecho de recurso está disponible en distintos idiomas.

11. Los extranjeros expulsados por infringir la Ley de inmigración tienen derecho a asistencia jurídica gratuita, pero no los extranjeros expulsados por una sanción penal. Los sancionados por infringir la Ley de inmigración tienen derecho a asistencia jurídica solo en caso de expulsión. Los extranjeros que necesitan protección no son sancionados por no disponer del documento de viaje válido. Los tribunales emitieron resoluciones favorables en aproximadamente uno de cada seis casos de personas rechazadas como solicitantes de asilo o expulsadas en 2010 y en uno de cada tres en 2011.

12. Los solicitantes de asilo tienen derecho a recurrir una decisión desfavorable; en casos excepcionales, pueden obtener asistencia jurídica gratuita. Todas las decisiones en materia de asilo tienen efecto suspensivo cuando se recurre una decisión negativa en primera instancia, salvo en los casos que se tramitan en virtud de la norma Dublín II, cuando claramente no se cumplen las condiciones para la residencia o cuando la solicitud de asilo ya ha sido rechazada en otro país. Las decisiones en los casos de asilo suelen tener efecto suspensivo cuando están pendientes de una decisión judicial.

13. La policía noruega trata con toda seriedad las desapariciones de niños de los centros de recepción. Las autoridades están empeñadas en prevenir esas desapariciones y la Dirección de Inmigración ha publicado directrices sobre las desapariciones de menores no acompañados de edades comprendidas entre los 15 y los 18 años, y sobre cómo hacer el seguimiento de las posibles víctimas de trata. La Dirección está obligada a notificar toda desaparición de un menor en cuanto se tiene conocimiento de ello; el procedimiento normal es notificar como desaparecidos a los menores no acompañados que han abandonado el centro de recepción sin dejar una nueva dirección, y comunicarlo a su tutor legal y al servicio de bienestar del niño.

14. Noruega reconoce que los niños no acompañados necesitan una atención particularmente buena mientras se encuentran en los centros de recepción, pero los que cumplen los 18 años están obligados a regresar a su país de origen. Mientras esperan hasta el viaje de regreso, tienen derecho a vivir en centros de recepción. Los niños a los que no se concede protección y que no son devueltos tienen derecho a un tutor legal hasta que alcanzan la edad de 18 años. A excepción de los casos tramitados con arreglo a la norma Dublín II, en 2011 el 75% de los menores no acompañados recibieron protección y el 12%

recibieron permisos de residencia por razones humanitarias. Otros menores que carecen de cuidadores conocidos en su país de origen reciben un permiso de residencia limitado.

15. Los permisos limitados se conceden a los menores no acompañados en razón de su vulnerabilidad. Sin embargo, no todos los menores solicitantes de asilo necesitan esa protección. El Gobierno procura impedir que los niños que no necesitan protección lleguen a viajar a Noruega. Cuando no es posible la residencia permanente, pueden concederse permisos limitados a jóvenes de 16 a 18 años incluso aunque no tengan derecho a protección o residencia por razones humanitarias.

16. Las autoridades que se encargan del bienestar del niño son responsables de la atención de los menores de 15 años no acompañados que solicitan asilo, mientras que de los menores de más de 15 años son responsables las autoridades de inmigración. El rápido incremento del número de menores no acompañados que solicitaron asilo entre 2007 y 2009 ha supuesto una carga tanto para los recursos humanos como para las infraestructuras; aunque el número de llegadas ha disminuido, el Gobierno decidió que en el período 2009-2013 los menores de más de 15 años no serían transferidos a las autoridades de bienestar del niño. Con todo, los menores de más de 15 años reciben la atención adecuada en consonancia con la legislación nacional y con las obligaciones internacionales. Con arreglo a la Ley de bienestar del niño, todos los menores solicitantes de asilo tienen derecho a la misma protección que cualquier otro niño de Noruega.

17. De acuerdo con la norma Dublín II, los miembros de la familia incluyen los miembros de la familia nuclear del solicitante. En general, Noruega asume la responsabilidad de las solicitudes a ese respecto, pero no se mantienen estadísticas en los casos que afectan a familiares lejanos. Noruega puede asumir la responsabilidad de una solicitud de asilo de otro país sea mediante la aplicación de la "cláusula de soberanía" si el ciudadano extranjero tiene una "conexión con el Reino" por medio de familiares cercanos o con arreglo a la "cláusula humanitaria" con el fin de proteger la unidad de la familia.

18. La cifra de solicitudes de asilo rechazadas y de expulsiones debe examinarse en el debido contexto. Las cifras a las que se alude en el párrafo 66 del informe se refieren a un período de cuatro años, en el que se adoptaron 340.000 decisiones de concesión de primeros permisos a extranjeros. En el mismo período, Noruega recibió 48.200 solicitudes de asilo; en ese contexto, 29.500 solicitudes denegadas no puede considerarse una cifra elevada. En 2011, se aprobó el 51% de las solicitudes de asilo examinadas por sus méritos, a excepción de los casos de la norma Dublín II; se trata de un porcentaje elevado para un país europeo.

19. Por último, el abogado que disparó un arma e hirió a un solicitante de asilo ha sido condenado por tentativa de asesinato y declarado psicótico. Las autoridades propusieron que fuera trasladado a un centro de atención mental obligatorio, y el tribunal le exigió pagar una indemnización al solicitante de asilo. No se dispone de información sobre si mantiene su licencia para ejercer la abogacía.

20. **El Sr. Austad** (Noruega) dice que, en su visita de mayo de 2011 al centro de extranjeros de Trandum, los miembros del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes observaron que las condiciones del centro eran en conjunto muy buenas, aunque se detectaron carencias. El caso específico del Sr. Abu Arrah, por el que se interesó el Comité, se resolvió en septiembre; la Dirección de la Policía rechazó la denuncia.

21. Su Gobierno conviene con el Comité en que es importante que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) visite a las personas que se encuentran en Trandum. El arreglo anterior con el CICR sigue en vigor y las visitas no han cesado. Aunque no se han acordado todos los detalles, es evidente que todas las partes desean un nuevo acuerdo y el Ministerio de Justicia ha adoptado medidas para acelerar el proceso.

22. Las condiciones del centro se han mejorado aun más con la construcción en abril de dos nuevos edificios con 72 celdas individuales dotadas de ducha y retrete separados. En las cuatro alas nuevas hay servicios comunes de lavandería. Se ha registrado una reducción del número de medidas restrictivas desde que comenzaron a utilizarse los nuevos edificios. Además, todo el personal ha recibido capacitación durante dos años, específicamente sobre comunicación y negociación y manejo de casos de posible suicidio. Hay personal de salud mental para las consultas sobre detenidos que son suicidas en potencia o enfermos mentales; además, una enfermera se encarga de los reconocimientos de los recién llegados.

23. En cuanto a las estancias de más de un día, hasta la semana anterior el sistema informático no ha tenido capacidad suficiente para extraer datos estadísticos sobre el plazo medio de detención, pero la mayoría de los varones adultos solteros permanece durante siete días y las familias con menores un máximo de 24 horas.

24. Durante el año anterior se introdujo en Trandum un nuevo sistema de registro que permitirá recoger estadísticas más precisas sobre las cifras de detenidos. Puesto que la atención se ha centrado en completar el sistema, no se dispone de cifras respecto del último año.

25. El Comité Europeo informó a la policía del centro de que se había encontrado en un expediente policial información sanitaria de un detenido. Los procedimientos se han revisado y enmendado para asegurar la confidencialidad de los datos médicos.

26. En cuanto a las preguntas planteadas sobre la reclusión en régimen de aislamiento, las personas que son detenidas suelen ser alojadas en una celda policial. Esta medida solo es adecuada para períodos cortos, pues los detenidos no tienen contacto con otras personas y en la práctica se encuentran en régimen de aislamiento. Los detenidos deben ser llevados ante un tribunal de distrito en un plazo de tres días; a partir ese momento, las normas policiales exigen que sean transferidos a un centro penitenciario en un plazo de 48 horas, a menos que ello sea imposible por motivos prácticos. Sin embargo, dada la escasez de plazas en las cárceles, la fiscalía a menudo pone en libertad a personas que de otro modo habrían sido llevadas ante el juez con el fin de proteger sus derechos humanos. En algunos casos los jueces no ordenan prisión preventiva si no hay plazas disponibles. El número de personas privadas de libertad durante más de 48 horas tras la detención ha disminuido considerablemente desde 2010.

27. Se ha informado de que la reducción en 2011 se debió principalmente a las mejoras en el distrito de policía de Oslo. Si bien la situación actual descrita en el informe del Comité Europeo es susceptible de mejoras, cabe señalar que la capacidad de los centros penitenciarios ha aumentado en los últimos años, aunque no al compás de las necesidades, que cada vez son mayores. Ello puede atribuirse en parte al éxito del Gobierno contra la delincuencia extranjera organizada, que ha influido en la disponibilidad de plazas penitenciarias. Se está trasladando a más detenidos de Bergen a prisiones de Noruega oriental de modo que no permanezcan en celdas policiales durante más de 48 horas.

28. Las solicitudes de atención médica normalmente se atienden con rapidez y, de acuerdo con el informe del Comité Europeo, la Dirección de la Policía ha enviado una carta a todos los jefes de policía para hacer hincapié en la necesidad de recordar a los agentes sus obligaciones a ese respecto.

29. Las normas relativas al aislamiento de los presos preventivos se enmendaron en 2002 de modo que el régimen de aislamiento solo puede aplicarse en condiciones estrictamente limitadas. Una encuesta realizada por la academia de policía noruega en 2009 concluyó que las enmiendas habían producido el efecto deseado. El uso del régimen de aislamiento está mucho menos extendido que en 2002; solo se utiliza durante períodos cortos y en casos graves.

30. **El Sr. Skulberg** (Noruega), refiriéndose a la reclusión en régimen de aislamiento, dice que en junio de 2012 la institución nacional de derechos humanos publicó un informe exhaustivo sobre la exclusión de compañía en las cárceles, en el que concluía que la normativa al respecto era vaga y discrecional. El Ministerio de Justicia ha examinado el informe y estudiará las recomendaciones que contiene. Aunque el informe indica que hay deficiencias en las normas de procedimiento relativas al derecho del preso a ser informado de los motivos de su aislamiento, los servicios penitenciarios no conocen ningún caso en el que se haya denegado esa información. Cuando se impone una orden de exclusión, la autoridad penitenciaria está obligada a incluir en la decisión su fundamento jurídico y los hechos por los que se aplica.

31. El informe indica que en algunos casos la exclusión no se ha notificado a las autoridades superiores como requieren las normas. Los servicios correccionales conceden la mayor importancia a esa cuestión y han escrito a todas las dependencias para recordarles sus obligaciones.

32. Las decisiones en materia de exclusión de compañía pueden recurrirse en un plazo de siete días o de 48 horas en el caso de las sanciones disciplinarias. En 2011 se presentaron 57 recursos contra la exclusión de compañía, 4 de los cuales fueron rechazados. Hasta la fecha en 2012 se han presentado 52 recursos, de los cuales 3 han sido rechazados. Esas cifras no se aplican a la totalidad del país.

33. El Departamento de Servicios Correccionales se propone nombrar un grupo de trabajo encargado de examinar las normas de funcionamiento y las responsabilidades de las juntas de supervisión regionales para asegurar que se protege debidamente el derecho de los reclusos a las garantías procesales.

34. Los sistemas informáticos que utilizan los servicios penitenciarios están anticuados y producen datos poco fiables; sin embargo, en 2013 se elaborará un informe por medios informáticos y se publicarán estadísticas relativas a la exclusión.

35. Un recluso de la prisión de Trondheim fue sometido al régimen de aislamiento durante un plazo de 110 días con el fin de mantener el orden y la seguridad; había proferido persistentes amenazas verbales y se había comportado de modo amenazante, haciendo que otros reclusos evitasen su compañía.

36. **El Sr. Austad** (Noruega) dice que la incidencia del delito de violación no es ni crónica ni más alta que en otros países. En los últimos años, el Gobierno ha dado gran prioridad a esta cuestión y ha alentado debates para abordarla de forma más eficaz en el contexto de un plan de acción iniciado unos meses antes. Se han instaurado varias medidas importantes, entre ellas penas más graves y una mejor atención a las víctimas. La voluntad del Gobierno de eliminar la violación es evidente. El Código Penal se refiere al empleo de la fuerza en los casos de violación; en la práctica, para que se produzca una condena basta con que el empleo de fuerza sea reducido. El consentimiento no es un concepto fundamental en la definición jurídica, pues no altera en modo alguno las exigencias en materia de prueba. Con todo, se revisará la redacción del Código Penal al respecto. Además, con el fin de mejorar las investigaciones y agilizar los juicios, se ha decidido imponer plazos máximos en los casos de violación al inicio de la investigación de cada caso. Se están realizando constantes esfuerzos por comprender la realidad más allá de las cifras sobre violaciones, un delito que adquiere muy diversas formas. El espectacular aumento de las denuncias de violación o intento de violación en Oslo desde 2010 responde a una mayor disposición a denunciar, lo cual debe ser alentado y bien recibido.

37. En cuanto al seguimiento electrónico de las órdenes de alejamiento en casos de violación, se ha retrasado el plan del Director de la Policía de introducir a título experimental un método en diciembre de 2012, pues la adaptación prevista de la solución que se emplea en España ha resultado ser incompatible con el sistema noruego.

38. El Comité ha solicitado estadísticas sobre casos de violencia contra las mujeres. En 2009 se produjeron 2.144 casos, 2.474 en 2010 y 2.604 en 2011. La mayoría de los casos se trataron con arreglo al artículo 219 del Código Penal.

39. Los serios esfuerzos que se están realizando para combatir la trata de niños han arrojado resultados positivos. Recientemente dos importantes investigaciones sobre la explotación de niños por grupos delictivos con fines de mendicidad y robo en comercios han dado lugar a sentencias condenatorias. Esos casos fueron considerados prioritarios por la policía; se hacen esfuerzos constantes para mejorar los resultados a ese respecto, por ejemplo el seminario nacional sobre la trata de seres humanos que se organizó a principios de 2012 para los servicios de policía y de la fiscalía.

40. **El Sr. Skulberg** (Noruega) dice que los menores infractores solo son enviados a prisión como último recurso. En 2010, un total de 1.600 menores fueron sometidos a custodia policial. De ellos, más del 50% fueron puestos en libertad en un plazo de seis horas y apenas 62 fueron enviados a prisión preventiva. En promedio, unos 10 jóvenes delincuentes se encuentran encarcelados en el país en un momento dado, principalmente en prisión preventiva.

41. **El Sr. Aaserudhagen** (Noruega) dice que en 2011 se aprobaron varias enmiendas legislativas relativas a los menores infractores, de los cuales la más importante fue el establecimiento de una nueva sanción penal conocida como "condena juvenil" y dependencias separadas para menores en los centros penitenciarios. También se han dispuesto estrictos límites a la prisión preventiva y la detención preventiva para menores. De hecho, la detención preventiva solo puede aplicarse en los casos más extremos y hasta la fecha ningún menor ha sido sometido a ese régimen. Por consiguiente, no hay jurisprudencia a ese respecto.

42. La nueva "condena juvenil" representa una alternativa real al encarcelamiento y tiene como propósito reducir el número de jóvenes menores de edad que cumplen penas de prisión. En virtud de la nueva disposición, un coordinador juvenil convoca una reunión con todas las partes interesadas a fin de establecer un plan de acción para un período de entre seis meses y tres años. El plan puede incluir varias medidas de prevención del delito, como orientación para el control de la ira o programas contra el abuso de las drogas o el alcohol, y su aplicación es supervisada por un equipo de coordinación juvenil.

43. **El Sr. Skulberg** (Noruega) dice que se están estableciendo dependencias separadas para los menores infractores en dos de las cárceles del país. Mientras tanto, en la prisión de Oslo se ha contratado como medida temporal a 3 terapeutas ambientales y 1 psicólogo infantil. Debido a la situación demográfica del país y la necesidad de que los infractores menores mantengan el contacto con sus familias, las autoridades noruegas no pueden excluir la posibilidad de que algunos menores hayan de cumplir sus condenas en cárceles ordinarias.

44. **El Sr. Austad** (Noruega) dice que el empleo innecesario de la fuerza por los agentes de policía no se considera un problema generalizado. El Gobierno ha decidido no seguir las recomendaciones que se formularon sobre el seguimiento de los casos de alto policial de carácter discriminatorio, pues en su opinión el mejor enfoque es la prevención en forma de capacitación de la policía. Tras la muerte de Eugene Ejike Obiora mientras se encontraba en custodia policial, las explicaciones sobre el peligro de utilizar la posición de decúbito prono durante los arrestos son ahora parte importante de la formación en la academia de policía sobre técnicas de detención.

45. Una denuncia concreta de violencia policial guardó relación con la detención de una joven ebria en 2008. La muchacha escupió a una agente de policía, quien seguidamente la abofeteó. Tras la investigación se decidió que, aunque innecesario, el empleo de la fuerza fue una reacción a una provocación y por consiguiente no fue ilícito.

46. **El Sr. Aaserudhagen** (Noruega) dice que el concepto de exención de responsabilidad penal en los casos de enfermedad mental, que actualmente se debate en el Parlamento, no es nuevo; el principio de la incapacidad mental lleva muchos decenios consagrado en el derecho penal. Los sospechosos de terrorismo disfrutaban de las mismas garantías procesales que todas las demás personas acusadas de un delito grave.

47. **El Sr. Skulberg** (Noruega) dice que en 2011 se produjeron 421 casos de violencia entre reclusos, y que el último asesinato de un recluso por otro recluso se produjo en 1982. También en 2011 se notificaron 261 casos de violencia y amenazas contra personal penitenciario, entre ellos 84 casos de violencia física; el último asesinato de un funcionario de prisiones por un recluso ocurrió en 1992.

48. Actualmente 698 personas llevan esperando más de dos meses a ingresar en prisión y comenzar a cumplir su condena. Se da prioridad a las personas en prisión preventiva, los menores de 21 años y las personas que deben cumplir condenas largas o condenas por delitos violentos o relacionados con pandillas, o delitos relacionados con la delincuencia organizada. Las autoridades noruegas consideran preferible tener una lista de espera para las personas condenadas por delitos leves a llegar a una situación de hacinamiento en las prisiones. Más del 90% de las personas en lista de espera se presentan en la prisión voluntariamente cuando llega el momento de cumplir su condena.

49. En general, las personas que se encuentran en régimen de prisión preventiva no están separadas de los reclusos que cumplen condena, pero la mayoría de los presos preventivos prefieren ese arreglo porque les ofrece mejor acceso a los programas de empleo, educación y formación. Los que no desean permanecer con los condenados no están obligados a ello.

50. **El Sr. Andersen** (Noruega) dice que, en virtud de la Ley de atención de salud mental, se utilizan medios restrictivos con los pacientes que padecen enfermedad mental solo cuando es estrictamente necesario para impedir lesiones personales o daños graves a las instalaciones. Los medios restrictivos están permitidos si los efectos beneficiosos superan a las desventajas. Los pacientes que están atados a una cama o silla son continuamente supervisados por profesionales sanitarios. Las normas relativas a la Ley de atención de salud mental imponen claros límites al uso de medios restrictivos. Un informe publicado en octubre de 2011 reveló un aumento en el uso de medidas restrictivas como cinturones y cascos desde 2007, mientras que la frecuencia de empleo de medios farmacéuticos se mantuvo constante. El informe recomendó establecer un sólido sistema de información electrónica para hacer un seguimiento del uso de medidas restrictivas.

51. El uso de medios restrictivos aún varía ampliamente de una región a otra. Ello se debe probablemente no solo a la escasa calidad de los datos sino también a las diferencias en las estructuras, las culturas y actitudes profesionales de los servicios. El Gobierno está trabajando para reducir esas diferencias. En 2010 se inició una nueva estrategia nacional encaminada a incrementar el personal voluntario en atención de salud mental, y una estrategia complementaria para el período 2012-2015 incluye medidas como capacitación en derechos humanos, mejor documentación y calidad de los datos y directrices comunes para las autoridades locales sobre el mayor uso de voluntarios.

52. En respuesta a los esfuerzos del Ministerio de Salud y Servicios de Atención por alentar la transición a servicios de salud mental de base local y centrados en el usuario, se ha producido un aumento de los equipos de extensión ambulatorios y de los ingresos gestionados por el propio usuario en los establecimientos de atención de salud mental. Las autoridades están trabajando en el establecimiento de directrices nacionales para el uso del tratamiento electroconvulsivo. También se mantendrá un registro nacional para registrar las ocasiones en las que se utiliza ese tratamiento.

53. En general, la atención de salud mental siempre debe prestarse con consentimiento del paciente. El ingreso forzoso en establecimientos de salud mental solo se permite cuando es manifiestamente la mejor solución y solo de conformidad con los criterios establecidos en la Ley de atención de salud mental. Todas las decisiones sobre ingresos involuntarios son supervisadas por una comisión local y pueden ser anuladas si se concluye que no se han aplicado los criterios antes mencionados. A los tres meses la comisión estudia si se sigue precisando una atención restrictiva. Los gobernadores de los condados reciben y tramitan las denuncias de tratamiento médico restrictivo. Existen defensores del paciente para ayudar a los pacientes a presentar denuncias.

54. El Ministerio de Salud está elaborando un informe sobre la calidad de la atención y la seguridad del paciente, centrado en la necesidad de intensificar la participación del usuario en todos los aspectos del sector de la salud. En junio de 2011 presentó su informe un comité encargado de examinar la legislación sobre las medidas restrictivas en la atención de salud mental. En él sugería que los medios restrictivos siguen desempeñando una función en la atención de salud mental para las personas gravemente enfermas, pero que la Ley de atención de salud mental debe establecer límites más estrictos y más claramente definidos sobre el empleo de la fuerza. El Ministerio de Salud ha examinado el informe y ha decidido centrar sus esfuerzos en medidas prácticas establecidas en la estrategia nacional para incrementar la dotación de personal voluntario en atención de salud mental, en lugar de elaborar nuevas leyes.

55. En todo el país, la atención primaria de salud para los reclusos es prestada por los servicios de salud locales en la comunidad en la que radica el centro penitenciario. En casos de urgencia médica, el médico de guardia de la prisión examina al recluso y solicita su traslado al hospital. Cuando la interrupción de una condena se considera injustificable por razones de seguridad, el caso es gestionado por los servicios correccionales regionales y dos funcionarios médicos en el nivel del condado. Se está elaborando una encuesta sobre salud mental en las prisiones para establecer un panorama general de las necesidades de los reclusos a ese respecto. El proceso de acopio de datos se ultimaré en primavera de 2013.

56. **La Sra. Meinich** (Noruega) dice que lamentablemente su delegación no dispone de tiempo para responder a las preguntas del Comité sobre delitos motivados por el odio, asistencia jurídica, la situación de los romaníes y el acoso de los niños judíos en las escuelas.

57. **El Presidente** (Relator para Noruega) dice que convendría que la delegación comunicara al Comité cuáles son las preguntas que a su juicio no guardan relación con la Convención. Las preguntas del Comité acerca de la aplicabilidad directa de la Convención fueron motivadas por una decisión del Tribunal Supremo, según el cual la Convención tuvo menos peso en la decisión del Tribunal de la que hubiera tenido de estar incorporada a la Ley de derechos humanos. El orador acoge favorablemente el hecho de que el proceso de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura se encuentre en sus últimas etapas. Da las gracias a la delegación por la aclaración acerca del calendario de las enmiendas al Código Penal en relación con los motivos de discriminación.

58. El orador pregunta si el Gobierno está convencido de que está suficientemente garantizado el derecho de los extranjeros del centro de detención de Trandum a recibir información sobre su derecho a recurrir las decisiones de utilizar medidas restrictivas contra ellos. Entiende que el Gobierno ha rechazado la recomendación del grupo de trabajo Maeland de abolir la detención preventiva para menores, pero desea saber si el Gobierno pretende aplicar las otras recomendaciones del grupo de trabajo. Pregunta si es cierto que el número de presos preventivos en celdas policiales durante más de 48 horas ha aumentado de 2010 a 2011, que los presos preventivos en celdas policiales siempre se encuentran en régimen de aislamiento y que las autoridades penitenciarias no están obligadas a justificar su decisión de ordenar el régimen de aislamiento. Desea saber si es cierto que el poder

judicial no tiene acceso a la base de datos INFOFLYT, si es cierto que el 60% de las personas recluidas en Noruega son extranjeros y cuál es la razón de que la delegación no proporcione estadísticas sobre los casos de trato discriminatorio por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

59. **El Sr. Wang Xuexian** (Relator para Noruega) dice que el número de preguntas que el Comité ha formulado a la delegación de Noruega es aproximadamente el mismo que a otras delegaciones que informan sobre la situación de su país. Pregunta cuántos de los niños desaparecidos en Noruega han sido hallados y pide más información sobre lo que les ha sucedido. Invita a la delegación a dar detalles sobre la información de que casi el 90% de las violaciones o los intentos de violación quedan sin denunciar, mientras el 84% de los casos denunciados nunca llegan a los tribunales y la mayoría de ellos terminan en absolucón. El Comité también ha sido informado de que, en un período de cinco años, el número de agresiones sexuales ha aumentado en más de un 22%, con un promedio máximo de casi tres al día en 2011.

60. El orador solicita más información sobre el caso excepcional de la persona que ha sido mantenida en régimen de aislamiento durante 110 días. A juicio del Comité, un aislamiento prolongado puede considerarse maltrato o incluso tortura, y 110 días es más que prolongado.

61. **El Sr. Bruni** pregunta cómo funcionan en la práctica las listas de espera para las prisiones y pide ejemplos de delitos menores a los que se aplicaría ese sistema. Desea saber cuál es la sentencia máxima para la que se emplea el sistema y si este es bien aceptado por los condenados, y si los condenados permanecen completamente en libertad durante el período de espera. El sistema puede acabar provocando un sufrimiento psicológico pues representa una forma diferida de castigo. Pregunta si los presos pueden ser puestos en libertad con antelación por buena conducta u otras razones.

62. **El Sr. Tugushi** pregunta si está previsto establecer un centro especial para tratar a las víctimas de tortura. También pregunta si se aplica el Protocolo de Estambul en los casos que afectan a solicitantes de asilo y si las organizaciones de la sociedad civil han participado en el diálogo sobre el sistema de protección de los derechos humanos, incluida la institución nacional de derechos humanos y el mecanismo nacional de prevención. Pregunta si la policía responde con eficacia a los informes de los centros de asilo sobre menores no acompañados desaparecidos y si se adoptan las mismas medidas que en los casos en que los desaparecidos son menores noruegos.

63. **El Sr. Gaye** pide más información acerca de los recursos contra la expulsión respaldados por los tribunales.

64. **El Presidente**, teniendo en cuenta los cambios en los requisitos de prueba en los casos de asilo, pide más información sobre el acceso a la asistencia jurídica. Pregunta si las autoridades están satisfechas con la forma en que se arresta y detiene a los extranjeros y en particular si están plenamente capacitadas para informar a los detenidos de sus derechos en un idioma que puedan entender. Pregunta también si los sospechosos están detenidos junto con los presos condenados.

65. **El Sr. Domah** pregunta en qué circunstancias se aplicaría la excepción prevista en el artículo 69 de la Ley de procedimiento penal y en particular si se aplica en los casos de tortura o violación.

66. **El Presidente** pide más información acerca del caso ya mencionado que afecta a un nacional afgano y pregunta si hay procedimientos judiciales pendientes.

67. **La Sra. Meinich** (Noruega) pide aclaraciones sobre la forma en que ciertas preguntas del Comité, por ejemplo las relativas al caso de Afar Bati, el seguimiento de la investigación del 22 de julio, la ratificación por Noruega de la Convención Internacional

sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares o las medidas generales relacionadas con la comunidad romaní, guardan relación específica con la Convención contra la Tortura.

68. El grupo de trabajo interministerial ha celebrado consultas con organizaciones no gubernamentales y con la sociedad civil acerca del Protocolo Facultativo y el mecanismo nacional de prevención propuesto.

69. **El Sr. Austad** (Noruega), refiriéndose al centro de Trandum, reconoce que el proceso de tramitación de denuncias es lento. La Dirección de Policía asegura el derecho de los detenidos a presentar denuncias en su idioma, que tengan acceso a representación jurídica y que reciban una copia de la decisión administrativa pertinente; también reciben un folleto de información a su llegada. Todas las denuncias son transmitidas a las autoridades competentes.

70. El elevado porcentaje de extranjeros en prisión preventiva (60%) frente al resto del sistema penitenciario (33% a 34%) se explica por el hecho de que los ciudadanos noruegos tienen menos probabilidades de huir del país, y no significa que los extranjeros cometan más delitos. También es más fácil aplicar medidas alternativas sustitutivas del encarcelamiento a los ciudadanos noruegos, lo que elimina la necesidad de privación de libertad.

71. En cuanto a la pregunta sobre los casos de racismo en la policía, las autoridades policiales han indicado que cuando se registran esos casos no se proporciona información sobre la nacionalidad o el origen étnico del informante. Las declaraciones motivadas por el odio o de contenido racista pueden ser motivo de enjuiciamiento, pero hay que cumplir muchos criterios antes de poder aplicar las disposiciones pertinentes. Las directivas policiales dan prioridad a la notificación de casos de denuncias de racismo. Con todo, esos casos son sumamente raros.

72. Los menores no acompañados que desaparecen de los centros de asilo suponen un reto para la policía. El Parlamento ha enmendado la ley recientemente para que los menores no acompañados puedan ser detenidos sin su consentimiento con el fin de impedirles que se fuguen y sean víctimas de trata de seres humanos. Aún queda por ver cuál será el éxito de esa legislación. Se siguen los mismos procedimientos cuando el menor acompañado es un solicitante de asilo y cuando es noruego. Sin embargo, los niños desaparecen por muy distintas razones, y esos casos no siempre entrañan actos delictivos. Su Gobierno considera que en los casos que afectan a jóvenes solicitantes de asilo las investigaciones deben realizarse con más frecuencia. En los centros de asilo, personal capacitado para ocuparse de cuestiones relacionadas con la trata evalúa si los menores han sido objeto de esa trata. Si desaparecen esos niños vulnerables, la información pertinente se transmite a la policía.

73. Las estadísticas sobre el delito de violación deben comprenderse en su contexto; las tasas de denuncia varían considerablemente de unos países a otros. La violación entraña un conjunto de circunstancias y apenas un pequeño número de casos se debe a agresiones de desconocidos. Las denuncias de violación son debidamente tramitadas por la policía, que permite a las mujeres ofrecer información detallada incluso si los actos que describen no reúnen los criterios legales para considerarse violaciones. Con todo, muchos casos de violación nunca llegan a los tribunales por falta de testigos fiables o pruebas suficientes; los estrictos requisitos en materia de prueba suponen una dificultad en los casos de violación. El Estado parte se compromete a mejorar los esfuerzos relacionados con la denuncia y la investigación de los casos de violación, pues aún queda mucho por hacer.

74. Aunque las personas temporalmente detenidas en celdas policiales no tienen contacto con otros detenidos, no se encuentran en régimen de aislamiento en sentido estricto. Aun así, es importante trasladar a los detenidos lo antes posible a una prisión ordinaria.

75. El centro de Trandum solo alberga a presos extranjeros que han sido condenados por infringir la ley, incluidas las personas a las que se les han impuesto multas. Su delegación proporcionará estadísticas más precisas sobre el centro a su debido tiempo.

76. El artículo 69 de la Ley de procedimiento penal se aplica en los casos en los que, por ejemplo, una víctima de trata ha infringido la ley. En ese momento la acusación puede retirarse pues esas personas se consideran primordialmente víctimas. El artículo se aplica solamente en los casos de delitos menores o en circunstancias excepcionales.

77. **La Sra. Myhren** (Noruega) proporciona estadísticas sobre menores no acompañados fugados. En mayo de 2012, seguían desaparecidos 49 de los 100 menores no acompañados que habían abandonado los centros de asilo en 2011 sin dejar una dirección de contacto; 25 de ellos ya no eran menores de edad.

78. Los procedimientos de asilo cumplen el Protocolo de Estambul, que se aplica a los solicitantes de asilo. El personal recibe instrucción sobre derechos humanos y sobre la manera de realizar entrevistas a los solicitantes. La junta de apelaciones de inmigración ha elaborado una lista de comprobación, al alcance de todos los examinadores de casos, para asegurar que se obtienen pruebas fiables. La Dirección de Inmigración también capacita a los entrevistadores para sensibilizarlos respecto de cuestiones relacionadas con la tortura. De conformidad con el Protocolo de Estambul, las personas que llegan a un centro de inmigración son sometidas a un reconocimiento médico.

79. Hasta 2005, los solicitantes de asilo tenían derecho a tres horas de asistencia jurídica. El procedimiento ha cambiado y ahora se centra en facilitar información. Cuando se evalúan casos de asilo, la presencia o ausencia de representación legal no supone una diferencia en el plazo de revisión de los casos; las solicitudes de asilo se evalúan lo antes posible.

80. En 2010, los tribunales trataron 58 casos relacionados con la inmigración (asilo y otros casos) y en 9 casos resolvieron a favor de los extranjeros. En 2011, los tribunales emitieron resoluciones favorables para los extranjeros en 22 de un total de 75 casos.

81. **El Sr. Andersen** (Noruega) dice que se están aplicando o están previstas numerosas medidas para mejorar el sistema de asilo tras el examen de la aplicación del Protocolo de Estambul por un grupo de trabajo. El grupo subrayó la necesidad de mejorar la atención primaria y especializada y de evaluar la comunicación y la cooperación entre sectores y autoridades. Entre las medidas figuran programas de formación para el personal de los centros de detención, acuerdos sanitarios normalizados en materia de atención a migrantes vulnerables, programas de educación para menores vulnerables, difusión de información y directrices revisadas, traducción de material pertinente, medidas para asegurar que los servicios sanitarios se proporcionen de acuerdo con la legislación y las normas nacionales, documentación sistemática de los casos de tortura, cooperación con las autoridades de inmigración en cuanto a las necesidades de los denominados casos Dublín II, comunicación de información pertinente a los centros de recepción y de salud y tramitación de solicitudes.

82. Por ahora no está previsto establecer dependencias especiales para las víctimas de tortura; el servicio de salud de Noruega proporciona la atención necesaria. A pesar de ello, existen cinco centros de apoyo regionales con responsabilidades especiales para los refugiados, que se centran específicamente en prestar atención a los menores no acompañados. También se ofrece orientación a los servicios de atención sanitaria primarios y locales y existen redes de cooperación. Las autoridades sanitarias regionales son competentes para establecer servicios de salud especializados.

83. En relación con un documento de política fechado en 2008, el orador subraya la necesidad de fortalecer la cooperación en el trato a las víctimas de violencia, incluidos los refugiados y los solicitantes de asilo. Desde 2006, la financiación de un equipo psicosocial

que se ocupa de los refugiados ha formado parte de los recursos asignados por la Dirección de Salud a los centros regionales.

84. **El Sr. Skulberg** (Noruega) dice que, en promedio, las condenas que se imponen en su país tienen una duración máxima de cuatro meses. Aunque la lista de espera para las prisiones es un problema, construir más prisiones no es la respuesta adecuada. Se necesitan alternativas al encarcelamiento, particularmente habida cuenta del gran número de condenas cortas; el propósito es reducir la reincidencia y dar con soluciones más humanas y menos costosas. Actualmente hay algo menos de 700 personas en la lista de espera, frente a unas 3.000 en 2006.

85. Normalmente las personas condenadas tienen hasta dos meses para prepararse para ingresar en el sistema penitenciario. El período de espera no se define como "lista de espera" a menos que se alargue más allá de esos dos meses. Aunque el período de espera puede considerarse psicológicamente difícil, existe la posibilidad de solicitar el ingreso inmediato en prisión. Las personas condenadas aguardan en su domicilio, sin un sistema de vigilancia electrónica ni condiciones especiales. Más del 90% de las personas condenadas se presentan para cumplir su condena. En la práctica, el sistema funciona y sirve como medio para evitar el hacinamiento.

86. Las autoridades penitenciarias están obligadas a justificar los motivos de ordenar el régimen de aislamiento con ciertas excepciones, estipuladas en las disposiciones de la Ley de ejecución de penas, cuando hay razones de seguridad o en interés de una investigación.

87. El sistema INFOFLYT ha sido diseñado para facilitar el intercambio de información entre la policía y los servicios correccionales. Un comité designado para examinar la cuestión presentó su informe en mayo de 2012, y la consulta pública ulterior ha terminado el día anterior. Los servicios correccionales pueden transmitir a la policía información sobre reclusos con el fin de prevenir o combatir el delito. Para proteger los derechos de los presos, en esos casos se aplicará la Ley de registros policiales. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública evaluará el informe del Comité y los resultados de la consulta. Se ha propuesto introducir normas para lograr el equilibrio entre los derechos de los reclusos y los derechos de los ciudadanos.

88. Se han adoptado medidas para mejorar el sistema de prisión preventiva, que incluye arreglos con varias prisiones de baja seguridad y la adaptación de tres prisiones para albergar a personas en régimen de prisión preventiva. Así, se han adoptado medidas para aplicar las recomendaciones del informe Maeland.

89. **El Sr. Aaserudhagen** (Noruega) dice que el informe del grupo de trabajo Maeland no planteó objeciones fundamentales pero consideró preocupantes las penas preventivas breves y el sistema de preparación de los delincuentes para la libertad provisional. Esas cuestiones serán examinadas por el Ministerio de Justicia, aunque aún no tienen gran prioridad. En cuanto a la libertad condicional, los jueces que tramitan casos penales ordinarios solo tienen acceso a documentos y declaraciones presentadas por la fiscalía y la defensa en el tribunal. Los casos se evalúan utilizando información muy diversa.

90. Importa subrayar que el Tribunal Supremo no ha afirmado que la Convención tenga menos peso porque no ha sido incorporada a la legislación noruega. La cuestión principal en este asunto no es si la Convención es directamente aplicable en la legislación noruega, sino que se refiere a cuestiones más delicadas de la Ley de procedimiento civil del país. El argumento del Tribunal Supremo no se aplica a los casos relacionados con la prevención de la tortura sino a ciertos casos civiles anteriores. Las observaciones del Tribunal Supremo se refieren a las disposiciones efectivas de la Convención más que a su grado de incorporación a las leyes internas.

91. **El Presidente** dice que las observaciones del Estado parte se tendrán en cuenta en la preparación de las observaciones finales.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.